

**JUICIO: MISSART LUCRECIA DELIA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EXPTE.Nº 57/23**

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
CENTRO JUDICIAL CAPITAL
Excma. Cámara Contencioso Administrativo - Sala I



SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, SEPTIEMBRE DE 2024.-

VISTO: para resolver la causa de la referencia, y

CONSIDERANDO:

I. Vienen los autos a resolución del Tribunal con motivo de la solicitud de regulación de honorarios efectuada por la letrada María Florencia Coronel mediante presentación digital de fecha 14/08/2024.

Atento al estado de la causa, corresponde hacer lugar a lo peticionado.

II. El objeto formal de la presente litis lo constituyó la pretensión de la actora Lucrecia Delia Missart, a través de su apoderada letrada María Florencia Coronel, en contra de la Provincia de Tucumán a los fines de obtener el reconocimiento e incorporación a su haber jubilatorio mensual, de la movilidad que le fuera otorgada y reconocida mediante las leyes con las que obtuvo su jubilación ordinaria.

Además, la actora reclamó el pago de las diferencias retroactivas existentes entre el monto de su haber de pasividad y el porcentaje movil

**JUICIO: MISSART LUCRECIA DELIA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EXPTE.Nº 57/23**

reconocido en su haber previsional (82%) calculado sobre las remuneraciones que por todo concepto perciban en la actualidad los agentes públicos en actividad, con más sus respectivos intereses desde la fecha en que son debidas y hasta el momento de su efectivo pago. Asimismo, requirió que en lo sucesivo se garantice la movilidad previsional de sus haberes jubilatorios.

En fecha 20/03/2024 se dictó la Sentencia Nº 214 que resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la actora. En consecuencia, se condenó a la demandada a abonar a la actora las diferencias generadas a su favor por aplicación del principio de movilidad (82%) en relación a los cargo por el cual obtuvo su jubilación a partir del 23/08/2020. Asimismo, se condenó a la demandada a a liquidar y abonar en lo sucesivo los haberes jubilatorios de la actora respetando la garantía de movilidad (82%) sobre los cargos de referencia, con más los adicionales que le fueron expresamente reconocidos, hasta tanto la ANSeS lo incorpore en sus haberes jubilatorios, debiendo la demandada procurar tal inclusión. En tanto, las costas del proceso fueron impuestas a la Provincia de Tucumán.

Posteriormente, en fecha 06/06/2024 se dictó providencia que aprobó planilla de sumas adeudadas por el monto bruto de \$18.149.043,58.- (pesos dieciocho millones ciento cuarenta y nueve mil cuarenta y tres con cincuenta y ocho centavos) a favor de Missart. Dicha suma se discrimina de la siguiente manera: (i) \$9.096.495,66.- (pesos: nueve millones noventa y seis mil cuatrocientos noventa y cinco con sesenta y seis centavos) en concepto de diferencias previsionales generadas en los períodos 23/08/2020 al 20/03/2024 y (ii) \$9.052.547,92.- (pesos:

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=CASAS Maria Florencia, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27235182063, Fecha:11/09/2024; CN=ACOSTA Juan Ricardo, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20276518322, Fecha:11/09/2024;CN=GUTIERREZ Celedonio, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20254988813, Fecha: 11/09/2024;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial delPoder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

**JUICIO: MISSART LUCRECIA DELIA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EXPTE.Nº 57/23**

nueve millones cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y siete con noventa y dos centavos) en concepto de intereses al 30/04/2024. A tales montos deberán deducirse los importes correspondiente a la obra social de la actora (3%)

Por lo tanto, las actuaciones se encuentran en estado de proceder a regular honorarios por el proceso principal.

III. A los efectos regulatorios se partirá de la suma aprobada en la providencia de fecha 06/06/2024 por el monto total de \$18.149.043,58. Seguidamente, para la determinación de los emolumentos se habrá de tener en cuenta lo dispuesto en los incisos 1 a 11 del artículo 15 de la Ley N° 5.480, fundamentalmente el tiempo empleado, valor, motivo y calidad jurídica de la labor del profesional, trascendencia económica y moral para el interesado beneficiario y el resultado obtenido. A lo que se aspira, por medio de este análisis exhaustivo, es a arribar a una determinación de los emolumentos lo más justa, razonable y aproximada a las circunstancias del caso, teniendo siempre presente el carácter alimentario de los honorarios.

Finalmente, se hace constar que en el presente acto jurisdiccional no se procederá a estimar honorarios a la representación letrada de la Provincia de Tucumán, atento al modo en que se distribuyeron las costas por su intervención, correspondiendo estar a lo previsto en el artículo 4 de la Ley N° 5.480.

En consecuencia, se entiende ajustado a derecho regular honorarios a la letrada María Florencia Coronel la suma de \$3.375.800.- (pesos tres

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=CASAS Maria Florencia, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27235182063, Fecha:11/09/2024; CN=ACOSTA Juan Ricardo, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20276518322, Fecha:11/09/2024;CN=GUTIERREZ Celedonio, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20254988813, Fecha: 11/09/2024;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

**JUICIO: MISSART LUCRECIA DELIA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EXPTE.Nº 57/23**

millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos), por su actuación en el doble carácter de apoderada y patrocinante de la parte actora, en las tres etapas del principal, donde las costas son a cargo de la demandada según la Sentencia Nº 214 de fecha 20/03/2024 (cfr. arts. 14, 15, 38, 39, 42 y 44 de la Ley Nº 5.480). Los honorarios se encuentran estimados al 30/04/2024.

IV. Por ello esta Sala la de la Excma. Cámara Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

REGULAR HONORARIOS a la letrada **MARÍA FLORENCIA CORONEL**, la suma de **\$3.375.800.- (pesos tres millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos)**, por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora, en las tres etapas del principal, donde las costas son a cargo de la demandada según la Sentencia Nº 214 de fecha 20/03/2024 (cfr. arts. 14, 15, 38, 39, 42 y 44 de la Ley Nº 5.480). **Los honorarios se encuentran estimados al 30/04/2024.**

HÁGASE SABER

JUAN RICARDO ACOSTA

MARIA FLORENCIA CASAS

ANTE MÍ: CELEDONIO GUTIÉRREZ

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=CASAS Maria Florencia, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27235182063, Fecha:11/09/2024; CN=ACOSTA Juan Ricardo, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20276518322, Fecha:11/09/2024;CN=GUTIERREZ Celedonio, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20254988813, Fecha: 11/09/2024;

La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial delPoder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>

**INICIA EJECUCIÓN. PLANTEO INCONSTITUCIONALIDAD-
SOLICITA SE FORME INCIDENTE.**

EXCMA. CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA 1

**JUICIO: “MISSART DE CARAN LUCRECIA DELIA Y OTRO VS
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA S/ CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”.**

Expte.57/23

MARIA FLORENCIA CORONEL, por derecho propio en autos, a V.E. respetuosamente digo:

I.-

Encontrándose firmes los honorarios profesionales, regulados por sentencia de fecha 11/09/2024, y no habiendo sido abonados por la condenada en costas, vengo a iniciar la ejecución de los mismos. –

En este sentido, solicito que se intime al pago de la suma de **\$3.375.800.- (pesos tres millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos)**, por mi actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora, en las tres etapas del principal, donde las costas son a cargo de la demandada según la Sentencia N° 214 de fecha 20/03/2024 (cfr. arts. 14, 15, 38, 39, 42 y 44 de la Ley N° 5.480). **Los honorarios se encuentran estimados al 30/04/2024.**

II.-

Estando vigente la ley 8851 y su decreto reglamentario 1583/1, la cual, constituyen un obstáculo insalvable para hacer efectivo - en lo inmediato- el cobro de los emolumentos regulados en autos, vengo a plantear su inconstitucionalidad. -

Previo a desarrollar los argumentos de la cuestión planteada, resulta necesario destacar el dictado de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia:

Fallo 1680/2017. Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia. -Dictado en los autos: **ALVAREZ JORGE BENITO y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA Expte. N° 06/10.-**

Determina, básicamente, la necesidad de considerar la especial situación que detentan los créditos de naturaleza alimentaria, como lo son los honorarios profesionales, estableciendo que la inembargabilidad que contiene la norma de la ley 8851 resulta contraria a las garantías constitucionales consagradas por los arts. 16 y 17 del CN. -

Igual criterio asumieron las tres Salas de esta Excma. Cámara. Citó como ejemplo los autos PAZ DOLORES DEL CARMEN Y OTRA c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPTE. N° 459/14, donde mediante resolución de Fecha Agosto de 2019; se sostuvo:

“...corresponde exponer que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ha emitido sendos pronunciamientos, referidos a la constitucionalidad de la Ley 8.851 y su Decreto Reglamentario, en casos similares al que se examina. Vale decir, en lo que respecta al pago de diferencias de haberes previsionales.

En este punto conviene recordar que -en principio- los Tribunales de grado tienen el deber de ajustar sus decisiones a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en casos similares. En ese sentido se dijo: "Los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán conociendo por vía de casación, constituyen doctrina judicial obligatoria y vinculante para los tribunales inferiores, cuando la identidad del caso a resolver encuadra en el precedente 1d (CSJT, Sentencia N° 158, 15/03/96, "Albornoz, Estela del Valle c. Grafa S.A.1d).

*Finalmente, la conclusión a la que arribo resulta coincidente con los argumentos expuestos por la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán en los autos "Álvarez Jorge Benito y otros s/Prescripción adquisitiva 1d (Sent. n° 1680/2017). En este sentido, nuestro Címero Tribunal indicó que "ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquélla para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración **la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley N° 8.851** ("Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva 1d), del art. 2 del Decreto N° 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del art. 2 de la precitada Ley N° 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público)1d.*

En aquella oportunidad -así como en autos- se advirtió la incuestionable naturaleza alimentaria del crédito en concepto de honorarios y la irrazonabilidad de la última parte del art. 4 de la ley 8851 (y consecuentemente del art. 2 de su decreto reglamentario), en cuanto sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el "estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva.

Por todas las razones expuestas, concluyo entonces que, con respecto a los honorarios regulados y devengados en mi favor, en el carácter de apoderada de la parte actora, corresponde declarar la inconstitucionalidad del régimen de inembargabilidad y de pago establecido por la Provincia de Tucumán a través de la ley 8851 y su decreto reglamentario n° 1583/1, con costas a cargo de la demandada en

virtud del principio objetivo de la derrota y lo normado por los art. 105 y 106 del CPC y C (por remisión art. 89 CPA)..”.

III.-Fundamentos. -

- Por la presente se persigue la declaración de inconstitucionalidad de la ley 8851 y de su Decreto Reglamentario, a los efectos del cobro del crédito de naturaleza eminentemente alimentaria, constituido por la sentencia que regula honorarios a la suscripta, que a la fecha se encuentran firmes. –

La ley impugnada (8851), pariente cercana de las anteriores (8228 y su última prórroga 8826), se diferencia de las mismas en que no prórroga, en “la literalidad de sus términos, el plazo para que pueda ser ejecutada la Provincia, lo que, por las sucesivas “emergencias” declaradas, lleva una vigencia ininterrumpida de más de 20 años. - Sobre el particular el Fallo 1680/17 de la Corte (1) expresó:

“... Siguiendo esa línea, atento a que el planteo pone en crisis la constitucionalidad del régimen de inembargabilidad que consagra la Ley N° 8.851, es preciso recordar que en autos este Tribunal dictó la resolución N° 262 del 9 de abril de 2015 (fs. 868/870), declarando “...LA INCONSTITUCIONALIDAD de las normas que establecen la inembargabilidad de los recursos del Estado Provincial para el caso concreto, incluyendo al art. 2° de la Ley N° 8.228 de fecha 18/12/2009, como así también las leyes que implicaron la extensión de su vigencia (Leyes N° 8.358 del 05/10/2010, N° 8.456 del 05/12/2011, N° 8.554 del 28/12/2012 y N° 8.753 del 22/12/2014)...”.

La ley 8851 adopta un régimen semejante al de la ley Nacional 24.624 que, en sus efectos, no se diferencia mayormente del que preveía la ley 8228, sus antecesoras, y sus prórrogas. –

En lugar de postergar la emergencia, consagra la inembargabilidad de los recursos financieros del Estado y arbitra una forma de cancelación de las obligaciones judiciales mediante un procedimiento que, además de importar una dilación más al curso normal

del que habitualmente tienen las causas judiciales, no asegura su cumplimiento ni determina plazo de pago. - Bien que se lean sus disposiciones, se apreciara:

a). - Que el pago queda siempre a merced de la voluntad del Estado por la discrecionalidad que tiene en la fijación de las partidas presupuestarias a ese fin. -

b). - Por la cláusula que establece: cuando el remanente de las partidas correspondientes no alcanzare a cubrir el monto que se le debe al acreedor de acuerdo a su turno, serán destinados a abonar otros créditos de menor cuantía. –

c). - Por los recaudos que exige para enrolarse en el procedimiento para su pago, al que el Decreto Reglamentario le agrega, violando expresamente esa ley (8851, art. 4º), que es el propio acreedor el que tiene que iniciar el trámite administrativo ante la Fiscalía de Estado en contra de lo que taxativamente dice esa norma: que es ese organismo quien debe elevar a la Secretaría de Hacienda la nómina de todos los juicios con sentencia y planilla firmes para ser incluidos en el correspondiente presupuesto.-

d). - Fija como un hito, para determinar la preeminencia en el cobro la antigüedad que registra esta última diligencia procesal (planilla firme), sin tener en cuenta otras pautas valorativas de suma importancia, como lo son: la antigüedad del juicio y la causa a la que obedecen los créditos. -

Sobre el particular, el fallo 1680/17 de la Corte (1) determinó:

“...Todo lo expuesto permite observar que el diseño de la Ley N° 8.851 y su Decreto reglamentario N° 1.583/1 (FE) posee severas falencias en la determinación de los plazos que el Estado debería respetar para posibilitar la consecución del pago. Efectivamente, el régimen en cuestión no fijó término alguno para que la repartición condenada remita el expediente al Registro de Sentencias Condenatorias (cfr. punto 2 del

anexo I del Decreto N° 1.583/1 -FE-); el Registro controle los antecedentes (cfr. punto 3 del anexo I del Decreto N° 1.583/1 - FE-); la Secretaría de Estado de Hacienda tome vista de las actuaciones (cfr. punto 4 del anexo I del Decreto N° 1.583/1 - FE-); el Registro y la Secretaría determinen el cronograma (cfr. punto 5 del anexo I del Decreto N° 1.583/1 -FE-) y las reparticiones, organismos y entidades involucradas tramiten el acto administrativo que ordene el pago correspondiente (cfr. punto 5 del anexo I del Decreto N° 1.583/1 -FE-). En esa lógica, el cumplimiento efectivo de la obligación de pago pende del hilo de que los órganos del mismo deudor adopten ciertas conductas positivas a tal efecto, sin estar compelidos a hacerlo por el vencimiento de plazos de tiempo específicos y concretos.

Sólo por profundizar en un aspecto, cabe destacar que el conocimiento fehaciente de la condena judicial firme se haya subordinado a que el Registro de Sentencias Condenatorias tome razón de la resolución respectiva, lo cual a su vez requiere que -sin un tiempo precisado- controle los antecedentes de la causa. En rigor, entonces, el acto de tomar conocimiento fehaciente de la condena judicial firme, a pesar de la trascendencia que tiene para el logro del pago, depende de la conducta que adopte un órgano del propio deudor, sin que tenga definido un plazo para materializarla. Tal circunstancia compromete severamente la eficacia del sistema, atento a que recién con la toma de razón se perfecciona la inscripción de la sentencia en el Registro...”.

Por otra parte, como es de pública notoriedad, la Provincia, con absoluta discrecionalidad, ha venido comprometiendo sus recursos financieros en forma irresponsable en consideración al desequilibrio presupuestado que invoca como causa para fundar esta ley. - Las distintas y múltiples erogaciones que en estos últimos ejercicios financieros vino haciendo, en cosas o actos que no son de estricta necesidad para el funcionamiento regular del Estado, como lo es de público conocimiento. -

La ley cuestionada, en su exposición de motivos se fundamenta en la estrechez de los recursos financieros con que cuenta la Provincia a los efectos de afrontar el pago del pasivo que registra, lo que no resulta en la actualidad un argumento válido para justificarla.

En mayo del año 2016, la casi totalidad de las provincias suscribieron un Acuerdo con el Gobierno de la Nación para la devolución del 15% de la coparticipación retenida para financiar el Anses desde 1992, mediante el pago en 5 cuotas del 3% desde el 2016 al 2020, lo que significa para la provincia un incremento en sus recursos en \$2.000.000.000, más que lo previsto, solo para este año, fondos que casualmente tenían el mismo fin que los que se reclaman por esta demanda. -

Igualmente debe aclararse que la invocada situación de emergencia económica no estuvo motivada por hechos extraordinarios e imprevisibles cuyas consecuencias hubieran perdurado durante tanto tiempo (más de veinte años), como ser: terremotos, pestes, sequías, hambrunas, inundaciones incontroladas y generalizadas a todo su territorio, guerras, revoluciones, etc.-

Por otra parte, esta pretensión se apoya en una razón de Estado necesaria para corregir este largo período de permanente inembargabilidad de los fondos públicos, que ha facilitado -de por sí- la irresponsabilidad de los administradores en su manejo, en especial, de cuidar adecuadamente el devengamiento del gasto público al amparo del escudo protector que implicaron las sucesivas inembargabilidades, permitiendo así, la habitualidad de esta mala praxis, máxime cuando la emergencia de las finanzas del Estado no afectaban directamente a toda la población, sino sólo a un sector: el de los acreedores del Estado y, en este caso, para peor, de algunos que no han tenido la posibilidad u oportunidad de evaluar el riesgo de incumplimiento del deudor que toda obligación lleva implícita, porque han sido sometidos a ser acreedores del Estado sin posibilidad alguna de opción.-

En cuanto a su fundamentación legal, tanto, con respecto a las leyes nacionales 25.565 sancionada el 6-3-2002 y que se remite a la

ley 24.624 del 29-12-95, debe tenerse en cuenta que esta última fue sancionada en el año 1995 con motivo de la llamada crisis mundial del “tequila” y la otra, en el año 2002, luego de la crisis institucional y económica que experimentó el país en el año 2001 por lo que resulta inadmisibles que se siga citando como respaldo de la ley que se cuestiona a estas leyes que fueron dictadas por motivaciones verdaderamente extraordinarias que se dieron en el ámbito del mundo y del país.-

La ley 8851, continuando el propósito de sus antecesoras pretende seguir sometiendo a los acreedores a un eterno peregrinaje y, ahora, obligándolos a pasillar la Casa de Gobierno, implorando a los funcionarios de turno que resuelvan finalmente el pago de sus acreencias, lo que queda a la discrecionalidad de los mismos. -

En el país existen distintos pronunciamientos que han declarado la inconstitucionalidad de normas semejantes, en tal sentido, conviene citar parte del fallo publicado en la Revista Foro de Córdoba nº 161, pgs. 163 a 167, donde el Camarista Díaz Reina, entre otras consideraciones, expresa: *“Que estas leyes resultan francamente inconstitucionales, al dejar vacío de atribuciones al juzgador e incompetente para el cumplimiento de sus decisiones. El Poder Judicial queda así privado de su potestad de velar por el total cumplimiento de las sentencias.”*

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Rocca”, dijo: *“...si no se puede ejecutar una sentencia se viola la cosa juzgada que es uno de los pilares fundamentales sobre lo que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de orden público toda vez que la estabilidad de las sentencias dictadas en un proceso regular, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia de orden público con jerarquía superior...”*.-

Finalmente cabe destacar el fallo de la Sala II en los autos **MATAMORO JOSE AVELINO C/ PROVINCIA DE TUCUMAN (Expte. 545/14)**, mediante sentencia de fecha 14/09/18 hizo lugar a idéntico planteo, bajo los siguientes argumentos:

“...Siguiendo con la sentencia antes aludida se sentó como criterio que ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar , para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nba 8.851 ("Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva 1d), del art. 2 del Decreto Nba 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del art. 2 de la precitada Ley Nba 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público). Esto último, en razón de que la inembargabilidad que por esta norma se establece encuentra su correspondencia temporal con las prescripciones del último párrafo del art. 4 de la Ley Nba 8.851, de tal suerte que el sistema legal así instituido es susceptible de descalificarse por inconstitucional porque, atendiendo a las peculiares circunstancias de la presente causa -señaladas precedentemente-, la duración de la inembargabilidad declarada en el art. 2 se asocia indefectiblemente a disposiciones normativas que, de conformidad a la naturaleza del crédito reclamado en autos, resultan contrarias a las garantías constitucionales consagradas en los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional. En virtud del fallo antes citado, este Tribunal, al resolver un caso análogo debe aplicar el criterio jurisprudencial seguido por la CSJT, a fin de no resultar descalificable como acto jurisdiccional válido (cfr. sentencia Nba 688/09 de la CSJT). ..”

IV.-PETITUM

Por lo expuesto, a V.E. solicito:

- 1.-** Tenga por iniciada la ejecución de mis honorarios profesionales y se forme el incidente solicitado.
- 2.-** Tenga por planteada la inconstitucionalidad de la ley 8851 y su decreto reglamentario. -
- 3.-** Se Intime de pago a la contraria y a su vez, se corra traslado del planteo de inconstitucionalidad. -
- 4.-** Se lleve adelante la ejecución iniciada, se dicte sentencia de trance y remate y se haga lugar al planteo de inconstitucionalidad, con expresa imposición de las costas. -

JUSTICIA

SOLICITO PASE A RESOLVER

EXCMA. CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA 1

JUICIO: “MISSART DE CARAN LUCRECIA DELIA Y OTRO VS SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA” S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Expte.57/23

MARIA FLORENCIA CORONEL, por derecho propio en autos, a V.E.
respetuosamente digo:

Atento a que la demandada no ha realizado el pago de mis honorarios
profesionales, vengo a solicitar pase a resolver la presentación de fecha 20/09/2024,
en la cual esta parte ha planteado la ejecución de honorarios, el planteo de
inconstitucionalidad y la formación de incidente para tal procedimiento.

PROVEER DE CONFORMIDAD

JUSTICIA.-